

La religión y los cimientos históricos de las políticas públicas dirigidas a madres y padres trabajadores

KIMBERLY J. MORGAN*

RESUMEN

Los países de Europa Occidental tienen diferentes conjuntos de políticas para madres y padres trabajadores, que incluyen guarderías, centros preescolares y licencias parentales. En este artículo se sostiene que es posible remontar los cimientos históricos de estas políticas a la manera en que la religión modeló los sistemas políticos y las sociedades de Europa a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Tres patrones distintos de diferencias religiosas profundas y conflictos influyeron en la estructura de los sistemas de partidos, en la relación entre el Estado y el sector del voluntariado religioso, así como en el arraigo de las creencias religiosas. Estas fuerzas también determinarían las primeras políticas públicas dirigidas a la infancia y a las familias, como por ejemplo la naturaleza de la provisión de educación para niños de corta edad. A finales del siglo XX, el legado histórico de este primer período determinaría en qué grado los países de Europa Occidental aceptarían el trabajo de las madres y tratarían de apoyarlo con políticas públicas.

Las políticas para ayudar a los padres a conciliar trabajo y familia figuran en la agenda política de muchos países europeos, impulsadas por los temores que suscita el descenso de la tasa de fertilidad, la lucha por la igualdad de género de feministas y "feminócratas" y la presión de la Unión Europea para que los Estados "activen" poblaciones hasta ahora "inactivas", animándolas a incorporarse al mercado de trabajo, incluidas las madres de niños de corta edad¹. A la hora de responder a estas presiones, el punto de partida de los distintos países es muy diferente. La mayoría de los países

nórdicos cuentan desde hace mucho tiempo con sistemas de guarderías y centros preescolares, además de licencias parentales que promueven la igualdad de género incentivando a los hombres a disfrutar de parte del período de baja remunerada. Tradicionalmente muchos países de Europa Continental han ayudado mucho menos a los padres trabajadores, ofreciendo bajas maternales más cortas y servicios de guardería limitados, y aunque esto está cambiando en varios de estos países, el ritmo de cambio a menudo ha sido muy lento. En Alemania, por ejemplo, ha habido reformas significativas en los últimos años para crear una licencia parental bien pagada y ampliar la red de guarderías públicas pero, fuera de los Länder del Este, la oferta de plazas de guardería es baja y los sistemas escolares tienen muy poco en cuenta las necesidades de los padres trabajadores. No obstante, en Europa Continental, Francia y Bélgica llevan tiempo siendo dos países un tanto excepcionales, ya que ambos cuentan con programas preescolares universales gratuitos con jornadas escolares de larga duración. Los dos países ofrecen igualmente otros servicios de guardería y subsidios que suponen una ayuda para los padres trabajadores.

¿Cómo pueden explicarse estas enormes diferencias en las políticas dirigidas a las familias trabajadoras en Europa Occidental? En mi investigación anterior, sostuve que es posible remontar los cimientos de estas políticas a la manera en que la religión influyó históricamente en el desarrollo político europeo, con consecuencias para la estructura de los sistemas de partidos, la relación entre el Estado y la sociedad civil religiosa, así como en los valores sociales con respecto a las funciones los roles de género (Morgan, 2006). Ciertamente, en la actualidad hay otras fuerzas en juego que

* Profesora Titular de Ciencia Política y Asuntos Internacionales. Universidad George Washington. kjmorgan@gwu.edu

¹ Este ensayo está adaptado de Morgan (2009).

están impulsando cambios en estas políticas en muchos países, pero la naturaleza de este cambio a menudo se ve restringida por los mecanismos de las políticas existentes y por otros legados históricos. En este ensayo se ofrece una visión panorámica del argumento y se aborda por qué estos factores históricos (algunos con más de 100 años de antigüedad) todavía influyen en las políticas públicas relativas al empleo de las madres. Geográficamente, el estudio se ha visto reducido por mis propias limitaciones: mi investigación se centra principalmente en los países nórdicos, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Holanda. Así pues, no es posible explorar aquí la aplicabilidad del argumento al caso español, aunque algunos autores han investigado la influencia de la Iglesia Católica en las políticas públicas en materia de relaciones de género y familia (Valiente, 2009). El ensayo concluye con algunas reflexiones sobre las implicaciones más amplias de esta investigación en el estudio de la política europea.

debate sobre el velo en Francia) ha animado a los académicos a reexaminar la función de la religión en las sociedades y en los sistemas políticos de Europa Occidental.

La religión desempeñaría una función especialmente importante en la configuración de los programas sociales dirigidos a la infancia, las familias y las relaciones de género. En muchas sociedades, religión y familia han mantenido a lo largo del tiempo una relación de estrecha complicidad e interdependencia. Las organizaciones religiosas dependían de la familia para transmitir sus prácticas y creencias religiosas, mientras que las familias recurrían a las iglesias como una fuente de comunidad, para impartir educación moral a sus hijos y, como mínimo, llevar a cabo los rituales básicos de la vida en torno al nacimiento, el matrimonio y la muerte (Edgell, 2006: 11). Además, en muchas sociedades la religión organizada ha sido una fuente importante de valores con respecto a las funciones de género y a la familia. Por último, las iglesias y organizaciones benéficas afines se han encargado históricamente de prestar servicios educativos y de otros tipos a la infancia y a las familias, lo que hizo que los actores religiosos se interesaran por la forma en que se socializa a los niños de corta edad.

1. LA RELIGIÓN Y LOS CIMIENTOS HISTÓRICOS DEL ESTADO DEL BIENESTAR

La religión ha sido ignorada durante mucho tiempo en el estudio del Estado del bienestar. Muchos estudios sobre la evolución de las políticas sociales se centran en el poder de la izquierda, la naturaleza del Estado, o en la influencia de otras instituciones políticas, como los sistemas electorales. Una importante excepción a este respecto es el trabajo de Kees van Kersbergen (1995), que pone de manifiesto que los partidos cristiano demócratas son fuerzas políticas tan cruciales como los partidos de izquierda en muchos países europeos, si no más, y que fueron a menudo artífices clave del Estado del bienestar. Esto ha impulsado a los estudiosos a examinar una gama más amplia de fuerzas políticas que influyen en los sistemas de protección social (Huber, Ragin, y Stephens, 1993). Recientemente, van Kersbergen, Philip Manow, y un pequeño grupo de estudiosos han llevado estas ideas más allá, explorando en mayor profundidad las maneras en que la religión y las profundas diferencias religiosas influyeron en los sistemas de partidos, la estructura del Estado, y los valores culturales, con consecuencias para el desarrollo de los Estados del bienestar a partir de finales del siglo XIX (van Kersbergen y Manow, 2009). Más en general, la repolitización de las cuestiones religiosas en varios países (véase por ejemplo el

En la segunda mitad del siglo XIX, en muchos países europeos el Estado intentó asumir un mayor protagonismo en el cuidado y la educación de los niños de corta edad. Esto puso en peligro un ámbito clave de influencia religiosa, generando conflictos y competencia en muchos países entre iglesias y élites secularizantes, y/o entre entidades religiosas rivales. Estas disputas formaban parte de conflictos religiosos mucho más generales que alentaron la creación de partidos de defensa religiosa y han tenido consecuencias duraderas para la estructura de la contienda política (Lipset y Rokkan, 1967). A su vez, esto influiría en las primeras fases del desarrollo político del Estado del bienestar, incluidos los programas dirigidos a las mujeres, la infancia, y las familias.

Cabe hablar de tres patrones de práctica religiosa, divisiones religiosas, y conflicto político asociado que tendrían una trascendencia duradera para los aspectos relacionados con el género del Estado del bienestar. Los países nórdicos se caracterizan por la homogeneidad religiosa, la fusión iglesia-Estado, y una consecuente falta de conflicto político de base religiosa. Cuando la Reforma llegó a Escandinavia en el siglo XVI, el protestantismo se convirtió en la religión del Estado, con un predominio del Estado sobre la iglesia. La subor-

dinación de la autoridad religiosa a la civil, y la homogeneidad religiosa de estos países, redujo al mínimo el surgimiento de diferencias religiosas profundas y, más tarde, de partidos religiosos. La autoridad política se fue secularizando gradualmente a lo largo de los siglos XVIII y XIX. En ocasiones, las iglesias nacionales lucharon contra estos fenómenos y hubo conflictos entre las iglesias establecidas y las sectas no conformistas pero, por lo general, los países nórdicos se libraron de las luchas provocadas por la cuestión religiosa en el resto de Europa. En su lugar, se beneficiaron del “círculo virtuoso” de la secularización (Martin, 1969) en el que un Estado cada vez más secular desplazó gradualmente a la autoridad religiosa de su función tradicional de proveedora de servicios educativos y sociales.

En Europa continental, por el contrario, la religión ha sido una fuente de conflictos políticos intensos, si bien la naturaleza y las consecuencias de los mismos han sido muy dispares (Lipset y Rokkan, 1967). La Revolución Francesa trajo consigo el primero y más violento de los ataques contra la Iglesia Católica, y sus reverberaciones a lo largo de todo el siglo XIX inspiraron desafíos a la autoridad eclesial en todo el continente. En Francia, Bélgica, e Italia, el enfrentamiento entre clericalismo y anticlericalismo dominó la vida política y social del siglo XIX, ya que los partidarios de la secularización trataron de debilitar la influencia de la Iglesia Católica en la política y la sociedad. En Francia y Bélgica, en particular, esto incitaría al Estado a hacerse cargo de los servicios educativos y sociales en un intento de arrebatar el control de estos programas a las organizaciones católicas.

La política en estos países se vería marcada por el persistente anticlericalismo de la izquierda. Como reacción, se constituirían partidos demócrata cristianos para defender los intereses de los católicos, los cuales se convertirían en actores políticos importantes en Bélgica e Italia. En Francia, en cambio, la democracia cristiana se desarrolló a duras penas bajo la oposición de las fuerzas intransigentes y antidemocráticas de la derecha y el anticlericalismo de la mayor parte del resto del espectro político. Conjuntamente, estos factores impidieron el desarrollo de un partido cristiano demócrata moderado a comienzos del siglo XX (Irving, 1973; Kalyvas, 1996). El Estado francés también desplazó más eficazmente al sector del voluntariado de su función de proveedor de educación y programas de bienestar, lo que permitió una centralización de la autoridad estatal sobre estas áreas. Al igual que en los países nórdicos, el Estado francés se encargaría

de la educación de la infancia y del bienestar de las familias. En Bélgica y en Italia, en cambio, el sector del voluntariado religioso continuó prestando muchos de estos servicios.

En Holanda y en Alemania, hubo enfrentamientos similares entre clericalismo y anticlericalismo, pero también divisiones entre protestantes y católicos. Ahora bien, a pesar de sus desavenencias, protestantes y católicos unieron fuerzas con el objetivo de preservar el control religioso sobre los servicios sociales y educativos. En última instancia, se aliarían y se harían con el poder político, bien como una coalición de calvinistas y católicos (en Holanda) o a través de un Partido Cristiano Demócrata predominantemente católico (en Alemania). Con su afianzamiento en el poder político, estos partidos de base religiosa se asegurarían de que el principio de la subsidiaridad (la noción de que el Estado debía dejar los asuntos sociales a cargo de la institución social de menor nivel posible) se convertiría en un gran principio rector del Estado del bienestar que justificaría el encauzamiento de recursos estatales hacia el sector del voluntariado religioso, que se encargaría de la educación y del bienestar social (Schmid, 1995)². La religiosidad de la sociedad siguió siendo alta y ello se reflejó en el poder de los partidos cristiano demócratas en el sistema político. La fortaleza de la religiosidad entre la clase obrera también debilitó el poder del anticlericalismo en la izquierda, que desarrolló una postura más acomodaticia hacia las organizaciones religiosas que en Francia o Bélgica, donde el anticlericalismo se mantuvo potente.

En resumen, durante la fase formativa del desarrollo político europeo, estos tres patrones de relaciones Iglesia-Estado y de diferencias religiosas profundas determinaron la fortaleza de las fuerzas religiosas tanto en la política como en la sociedad, lo que incidió en los partidos políticos, en el sector del voluntariado de base religiosa, y en el equilibrio de poderes entre el Estado y la sociedad civil. Si bien los partidos cristiano demócratas serían preponderantes en la mayor parte de Europa continental, éstos estarían en una gran medida ausentes no sólo en los países nórdicos sino también en Francia. El principio de subsidiaridad sería de máxi-

² En Holanda, los calvinistas abrazaron la noción de “soberanía en el círculo de uno mismo” que también favorecía dejar la responsabilidad de los servicios educativos y sociales en manos de agentes locales de carácter religioso, aunque con una orientación más antiestatal, proclamando que la familia, la iglesia, y otras organizaciones sociales deben permanecer libres de toda interferencia estatal.

ma importancia en Holanda y en Alemania; aunque cuestionado, se impondría en Bélgica y en Italia, y resultaría derrotado en Francia y en los países nórdicos, donde unos estados centralizados asumirían un mayor control sobre la provisión de bienestar social en una “inversión del principio de subsidiaridad” (Archambault, 1996: 15-17).

Estos patrones de diferencias religiosas profundas y conflictos también se reflejarían en la legislación y en las primeras políticas públicas dirigidas a la mujer, la infancia y la familia. En los países nórdicos, la secularización alentó la conceptualización de las mujeres como personas con derechos independientes de sus vínculos familiares, contribuyendo así al declive del derecho patriarcal. Los países escandinavos fueron pioneros en el desarrollo de un derecho de familia que otorgaba un estatus de igualdad a hombres y mujeres (Therborn, 1993). Por ejemplo, las leyes de reforma del matrimonio promulgadas a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX consagraron la igualdad de los esposos en el matrimonio, permitieron el divorcio de mutuo acuerdo, y establecieron la copropiedad a partes iguales de marido y mujer (Bradley, 2000: 10). La menor influencia de la religión contribuyó igualmente a la individualización de los derechos a prestaciones del Estado del bienestar. En el resto de Europa, el derecho a prestaciones sociales de una mujer normalmente estaba ligado a su estado civil. En Escandinavia, en cambio, las mujeres estaban individualmente facultadas para solicitar las prestaciones de los primeros programas sociales en su calidad de ciudadanas y no de esposas (Sainsbury, 1996: 63-64). El desarrollo de estos elementos individualizadores de la política familiar se completaría a lo largo de las décadas siguientes, pero fueron importantes para sentar el principio de que las mujeres existen con independencia de sus relaciones familiares.

Por ello, quizá sorprenda que estos países no fueran pioneros en la expansión de la educación preescolar estatal, la cual apenas se desarrolló hasta bien entrado el siglo XX. Esto no fue porque se creyera que los centros preescolares o guarderías estatales fueran ilegítimos y debían dejarse en manos del sector del voluntariado: al contrario, la temprana fusión de la iglesia con el Estado y la secularización de la autoridad pública llevó *de facto* a una transferencia de responsabilidad sobre la infancia y las familias de las autoridades religiosas a las seculares. Al contrario, la *ausencia* de conflictos religiosos en torno a la educación de la infancia frenó el crecimiento de los programas dirigidos a niños de corta edad (Morgan, 2002). Sin competencia

entre las fuerzas clericales y anticlericales ni entre los diferentes grupos religiosos sobre quién debía modelar estos tiernos corazones y mentes, no hubo ninguna necesidad apremiante de ampliar el sistema educativo a los niños menores de seis o siete años, la edad a la que comenzaba la escuela primaria. De este modo, estos programas se desarrollaron muy poco, al centrarse las autoridades educativas en la escolarización masiva de los niños mayores de siete años.

En los países marcados por conflictos religiosos más fuertes, la “batalla de las escuelas” impulsó la expansión de los servicios a niños con edades inferiores a las de escolarización obligatoria. En Bélgica y en Francia, la lucha por el control de la educación se centró en gran medida en las escuelas primarias, pero también llegó a afectar a los programas preescolares administrados por las órdenes religiosas católicas. Para no dejar los servicios educativos en manos de la Iglesia Católica, los republicanos anticlericales de Bélgica y Francia se hicieron con el control de estos programas a finales del siglo XIX, incorporándolos a los sistemas educativos nacionales como servicios no obligatorios (Dajez, 1994: 161-165; Mallinson, 1963: 83-85). En el futuro, la educación de los niños de tres a seis años sería responsabilidad del Estado, si bien la implementación de esta visión variaría en función del poder relativo de las fuerzas políticas católicas. En Bélgica, los católicos recuperaron el poder político y reservaron un lugar para que las asociaciones de voluntariado religiosas prestaran estos servicios con subvenciones estatales (Mallinson, 1963: 99-102; Fix, 2000). En Francia, en cambio, los republicanos seculares ganaron la batalla a las fuerzas religiosas y se aseguraron de que tanto las *écoles maternelles* como las escuelas elementales estuvieran en manos del Estado³.

Los conflictos entre clericalismo y anticlericalismo también influyeron en el desarrollo de las ayudas familiares en Francia. Cuando a finales del siglo XIX y comienzos del XX el descenso de las tasas de fertilidad hizo temer la despoblación de Francia, los conservadores católicos culparon de ello a los ataques republicanos contra la religión y los valores tradicionales (Talmy, 1962: 60-61).

³ Tras décadas de conflicto, una ley de 1959 finalmente permitió la existencia de escuelas religiosas con financiación pública junto a las escuelas públicas seculares, si bien dichas escuelas fueron mucho menos numerosas que en la vecina Bélgica. A mediados de los noventa, cerca del 60% de los estudiantes de Bélgica asistían a escuelas católicas; en Francia, en el presente, menos del 14% de los alumnos de preescolar y primaria están en colegios privados.

La respuesta republicana fue el pronatalismo, una doctrina secular y nacionalista que fomentaba las familias numerosas en nombre de la grandeza de la nación (Antomarchi, 1996: 41; Lenoir, 2003, capítulo 4). Estas ideas fueron abrazadas por las asociaciones familiares pronatalistas que eran los equivalentes seculares de las asociaciones conservadoras católicas. Al intensificarse la inquietud por el descenso de la población, los conservadores católicos y los pronatalistas republicanos hicieron frente común respecto a la necesidad de políticas familiares generosas, que incluyeran ayudas a familias numerosas, medidas fiscales, esfuerzos para promover la salud infantil y maternal y, a finales de los años treinta y cuarenta, un sistema de prestaciones familiares que otorgara ayudas por hijo más elevadas a las familias numerosas (Pedersen, 1993). Así pues, estas políticas supusieron una expansión adicional de la función del Estado en las vidas de las familias. En torno a la misma época, en Bélgica se desarrollaron políticas familiares más o menos similares que reflejaban la situación demográfica y económica existente después de la Segunda Guerra Mundial, así como la presión de las asociaciones familiares católicas y socialistas a favor de tales programas (Martin y Hassenteufel, 1997: 29-31, 116)⁴.

En Italia, el principio de subsidiaridad resultaría más fuerte, ya que los católicos se las arreglaron para conservar el control sobre la educación y los servicios sociales. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, los liberales anticlericales crearon un sistema educativo público, reprimieron a las congregaciones religiosas y secularizaron la institución del matrimonio (Halperin, 1947: 22-24). Pero al final no lograron realizar su mayor aspiración, que era regular la vasta red de organizaciones benéficas de la Iglesia, lo que refleja la debilidad del Estado al igual que la ausencia de una agenda social ambiciosa en el bando liberal (Quine, 2002: 293-295; Lynch, 2009). De ahí que las organizaciones benéficas religiosas conservaran el control de los programas de bienestar social, incluido el precursor de la enseñanza preescolar moderna (Pistillo, 1989: 157). Más tarde, el régimen fascista trató de desarrollar un conjunto más coherente de políticas familiares y educativas (mayormente para ponerlo al servicio del pronatalismo y la inculcación de los valores fascistas), pero las órdenes religiosas conservaron el monopolio sobre las *scuole materne* (Marraro, 1936: 46-52). Las organizaciones reli-

⁴ Los grupos católicos preferían la financiación estatal para patrocinar sus obras benéficas, mientras que las asociaciones socialistas hacían campaña por una mayor intervención estatal en apoyo de las familias con ayudas y servicios.

gias mantuvieron su hegemonía sobre la educación preescolar y los programas de bienestar social hasta bien entrados los años sesenta, cuando por fin tuvieron que hacer frente a un reto más decidido por parte de la izquierda (véase más adelante).

Si bien la izquierda anticlerical promovió activamente una mayor intervención del Estado en el bienestar de la infancia y las familias en Francia y Bélgica, fue mucho menos combativa a la hora de fomentar los derechos de las mujeres. En Francia, por ejemplo, los republicanos en ocasiones se opusieron a la subordinación legal de las mujeres pero no abrazaron esta causa con el mismo entusiasmo que desplegaron en la cuestión de la educación. Una razón para ello es que los republicanos solían pensar que las mujeres estaban subyugadas por la Iglesia Católica. Esto era una razón aún más poderosa para asegurarse de que sus hijos recibieran una educación secular lo antes posible, que les liberara del influjo del oscurantismo religioso, pero no generó el mismo interés en la izquierda por ampliar los derechos políticos de las mujeres, ya que se suponía que votarían a los católicos. En vez de ello, tanto en Francia como en Bélgica los republicanos abrazaron con fruición las políticas familistas, poniendo en marcha ayudas familiares generosas que tomaban a la familia, y no al individuo, como la unidad definidora de la política social. Es de resaltar que Francia, Bélgica e Italia fueron de los últimos países de Europa Occidental en conceder el derecho de voto a las mujeres.

En Alemania y Holanda, la primacía política de las fuerzas religiosas también influyó en las primeras políticas educativas y familiares. Al contrario que en Escandinavia, el conflicto y la rivalidad religiosa impulsaron la expansión de los programas de educación preescolar en estos dos países a comienzos del siglo XX. La resolución de estos conflictos a favor de las fuerzas religiosas determinaría a la postre la naturaleza y la evolución de estos programas en las siguientes décadas. El concepto de subsidiaridad se institucionalizó en el Estado del bienestar y las funciones de los servicios sociales y de algunas enseñanzas se delegaron en organizaciones religiosas y otras asociaciones del voluntariado. En Alemania, esto confirió un enorme poder a las dos asociaciones religiosas más grandes y relevantes: la protestante *Diakonisches Hilfswerk* y la católica *Caritas* (Spotts, 1973; Schmid, 1995). De manera similar, en Holanda, las organizaciones del voluntariado monopolizaron la prestación de servicios sociales financiados con fondos públicos (Brenton, 1982). Contrarias al trabajo de las madres fuera del hogar, estas organizaciones estructuraron sus primeros pro-

gramas educativos de tal manera que los centros sólo estuvieran abiertos parte del día o unos pocos días a la semana, para que de este modo no pudieran ser de ayuda a los padres trabajadores. En Francia y Bélgica, en cambio, los programas estaban configurados a semejanza de las escuelas primarias, por lo que estaban abiertos durante una amplia jornada escolar, cinco días a la semana.

Como en el resto de Europa Continental, en estos dos países no se reformaron muchos elementos patriarcales del Derecho de familia hasta varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, hasta 1977, en el Código Civil alemán se describía explícitamente a las mujeres como amas de casa y las mujeres tenían la obligación legal de cumplir sus tareas domésticas antes de poder justificar el trabajo fuera de casa (Hantrais, 1994: 147). En Holanda existían medidas similares que privaban a las mujeres de personalidad jurídica y que se suprimieron en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El predominio político de los partidos confesionales se plasmó igualmente en leyes restrictivas en materia de aborto, homosexualidad y otros aspectos de la moral sexual hasta los años setenta (Bussemaker, 1998: 29).

2. LA EXPANSIÓN DEL ESTADO DEL BIENESTAR DESPUÉS DE 1945

Los distintos enfoques de políticas públicas adoptados a comienzos del siglo XX, junto con la estructura de diferencias políticas profundas heredada de este período, conformaron el modo en que los Estados responderían a la cuestión del empleo de las madres durante los treinta años de expansión del Estado del bienestar después de 1945. Los “treinta gloriosos años” fueron un período de crecimiento económico espectacular y desarrollo del Estado del bienestar. También fue el cenit del modelo del hombre proveedor, que se reflejó y se sustentó en las políticas sociales del período. Entre ellas figuraba la obligatoriedad de la tributación conjunta de los esposos, que desincentivaba el empleo de las madres; altos salarios masculinos asegurados mediante convenios salariales negociados; una regulación del acceso a los programas de la seguridad social que reflejaba la presunción de dependencia de las féminas respecto de los ingresos de los varones; y, en algunos países, ayudas familiares generosas. Las guarderías públicas eran escasas, lo que reflejaba la opi-

nión de que los niños necesitaban el cuidado a tiempo completo de sus madres en los primeros años de vida.

En la mayor parte de Europa Occidental, estas políticas apenas cambiaron durante todo el período de rápida expansión del Estado del bienestar (aprox. 1945-1975). Con todo, a partir de mediados-finales de los años sesenta, unos cuantos países (Holanda junto a Bélgica y Francia) empezaron a poner en marcha políticas de apoyo a las madres trabajadoras, como guarderías públicas y bajas por maternidad o licencias parentales mejores. Suecia dio un paso más en el desmantelamiento del modelo del hombre proveedor al eliminar la tributación conjunta obligatoria en 1971 e individualizar totalmente el régimen de acceso a las ayudas sociales: dos medidas que crearon incentivos para que las mujeres casadas ejercieran un empleo remunerado. Los demás países nórdicos aplicaron políticas similares con distintos grados de entusiasmo. Francia y Bélgica adoptaron un enfoque mixto que ampliaba los servicios y las ayudas a los padres trabajadores, pero también mantuvieron algunas políticas familiares tradicionales.

Estos patrones de cambio en las políticas públicas reflejaban tanto los legados de políticas del pasado como el modo en que la religión había configurado los sistemas de partidos en estos países. Uno de dichos legados consistía en los programas y creencias institucionalizados en torno a la relación apropiada entre el Estado y la familia. ¿Debe el Estado encargarse directamente de proporcionar servicios para niños de corta edad, o bien, debe haber un estamento intermedio de asociaciones del voluntariado entre el Estado y la familia? En Francia y Bélgica, la responsabilidad estatal se afianzó con un sistema educativo temprano que ayudaría a satisfacer las necesidades de los padres trabajadores. Hacia 1970 la escolarización preescolar era prácticamente universal en ambos países, comenzando en edades tan cortas como dos años o dos años y medio, y con una jornada escolar amplia que abarcaba la mayor parte del tiempo que los padres pasaban en el trabajo. Ambos países contaban igualmente con un sistema de fondos para prestaciones familiares que podían aplicarse a construir guarderías o conceder ayudas económicas a los padres que solicitaban ayuda para el cuidado de los niños. En los países nórdicos, el Estado había asumido igualmente la responsabilidad de proveer para la educación y el bienestar de las familias, en lugar de dejarlo en manos de las organizaciones del voluntariado. Aunque los servicios de guardería y preescolar eran limitados en esta

época, no había muchas dudas de que cuando surgieran nuevas necesidades familiares, sería responsabilidad del Estado atenderlas. En países como Alemania Occidental u Holanda, por el contrario, la idea de la intervención del Estado en los asuntos familiares era vista como una ingerencia indeseada en la esfera privada. Las organizaciones del voluntariado ofrecían una capa protectora interpuesta entre el Estado y la familia –una capa de la que prácticamente adolecían los países nórdicos y Francia⁵.

Otro factor clave era el modo en que la religión influyó en las sociedades y en los sistemas de partidos de estos países. La fe y la participación religiosas eran ya muy débiles en Francia y en los países nórdicos, lo que hizo que el empleo de las madres fuera una cuestión menos controvertida que en la mayoría de los países de Europa continental (Morgan, 2006). La inexistencia (o debilidad) de los partidos religiosos también afectó al espectro de rivalidad política y a las estrategias de los partidos políticos. En los países nórdicos, los socialdemócratas no tuvieron que disputarse el voto de las clases trabajadoras con los partidos religiosos, lo que reforzó su posición en la arena política. También facilitó un giro en la estrategia de partido el crecimiento de una clase media que albergaba opiniones más igualitarias en cuanto al género. Los socialdemócratas podían ganarse a este creciente grupo social de trabajadores de cuello blanco, a menudo funcionarios, sin temor a perder el voto de sus bases de clase obrera más tradicional a favor de algún partido religioso (Morgan, 2006). Lo hicieron dando la vuelta a su propio modelo de hombre proveedor, que habían apoyado durante mucho tiempo, y haciendo suyo el objetivo de transformar la sociedad en una donde todas las madres tuvieran un empleo remunerado y los padres se ocuparan más de los niños.

En Francia, los partidos de centro-derecha gobernaron durante todos los años sesenta y setenta y se ocuparon poco por transformar los roles de género del modo que estaba sucediendo en la mayor parte de Escandinavia. Ahora bien, a diferencia de los cristiano demócratas que gobernaban en otros países europeos, los Gaullistas franceses y otros políticos del centro derecha a menudo fueron más pragmáticos que moralizadores en cuan-

⁵ El caso belga es un tanto mixto: las asociaciones del voluntariado eran importantes proveedoras de centros preescolares y otros servicios, y recibieron fondos públicos para prestarlos, pero el Estado también proporcionaba directamente tales programas.

to al empleo de las madres. Si las mujeres querían ganarse un sueldo y ello podía beneficiar a la economía, entonces estos diseñadores de políticas públicas eran partidarios de ayudarlas (Morgan, 2003). Además, los fondos de prestaciones familiares de Francia tenían la misión de asistir a los trabajadores que contribuían a ellos con sus impuestos. A medida que aumentaba el número de mujeres trabajadoras, y cambiaban las necesidades familiares, las políticas de estos fondos también se fueron transformando. Desde comienzos de los años setenta, las crecientes tasas de empleo de las madres propiciaron la decisión de redirigir una parte de estos fondos a ampliar la red de guarderías públicas, y en las siguientes décadas Francia desplegaría una gama de servicios y subvenciones que ayudaron a los padres a atender las necesidades de cuidado de sus hijos.

Sin embargo, al mismo tiempo se mantuvieron algunos de los aspectos más tradicionales de la política familiar, tales como las generosas ayudas familiares y la tributación conjunta. Esto refleja el hecho de que si bien las fuerzas conservadoras no monopolizaban la política familiar francesa, tampoco puede decirse que estuvieran marginalizadas en absoluto. Las asociaciones familiares conservadoras (a menudo católicas) continuarían determinando las políticas públicas, aunque tendrían que compartir su influencia con asociaciones familiares protestantes, seculares, e izquierdistas, al igual que con unos sindicatos que estaban firmemente comprometidos con el empleo femenino (Martin y Hassenteufel, 1997: 45-46). Como resultado, la política familiar francesa refleja un equilibrio entre orientaciones rivales en lugar de un sesgo progresista o conservador. La política familiar belga refleja un equilibrio de fuerzas similar, con grupos familiares conservadores bien situados en el proceso de toma de decisiones pero sin un control decisivo sobre el diseño de las políticas públicas (Martin y Hassenteufel, 1997: 33-35; Marques-Pereira y Paye, 1998).

No obstante, una cosa que diferenciaría tanto a Francia como a Bélgica de la mayoría de sus vecinos es que los partidos de izquierda ya eran unos defensores bastante sólidos del empleo de las madres en los años setenta. Por ejemplo, tras una campaña del partido socialista belga a favor de la reforma de la política familiar, en 1968 los partidos socialista y cristiano social sellaron un acuerdo de gobierno que establecía que el Estado debía proveer tanto guarderías para las madres trabajadoras como ayudas económicas para las madres amas de casa. Acuerdos similares alcanzados a comienzos de los años setenta allanaron el camino para la

expansión del sistema público de guarderías, prometiendo también ayudas económicas adicionales a las familias. Durante los años siguientes, las fuerzas partidarias de las guarderías públicas lograron imponerse a quienes exigían la creación de una ayuda económica especial para las amas de casa (Dubois, Humblet, y Deven, 1994: 39). El acceso a las guarderías públicas se amplió, aunque a un ritmo más lento que en Francia. No obstante, resulta curioso que los socialistas y los sindicatos belgas asumieran valores tradicionales y canalizaran recursos hacia las guarderías públicas.

En Italia, la izquierda también se opuso al control de la Iglesia sobre la educación preescolar y los servicios sociales, y se erigió en defensora de las guarderías públicas, los permisos parentales, la reducción de jornada, y de otras políticas para ayudar a conciliar familia y empleo remunerado (Bimbi y Della Sala, 1998: 177). El resurgimiento del anticlericalismo en los años sesenta alimentó las batallas sobre el sistema preescolar público, ya que las fuerzas republicanas, liberales y socialistas lograron sacar adelante un sistema preescolar financiado con dinero público capaz de competir con los programas administrados casi enteramente por la Iglesia Católica (Bimbi y Della Sala, 1998: 181-182; Pistillo, 1989: 161). Los servicios preescolares se ampliarían en las décadas posteriores. En 1971, la movilización de la izquierda impulsó igualmente la aprobación de una baja por maternidad obligatoria de cinco meses, así como de una ley que definía el cuidado infantil como un derecho social y transfería una parte de las cotizaciones sociales a las regiones para que crearan guarderías para niños menores de tres años (Saraceno, 1984: 11; Bimbi y Della Sala, 1998: 185). No obstante, los fondos eran limitados y se produjo una gran variación regional en la creación de guarderías, lo que reflejaba en parte la fuerza dispar de la izquierda en las diferentes partes de Italia. Por ejemplo, hacia 1986, el 19% de los niños de la región de Emilia Romagna (gobernada por el partido comunista) tenía plaza en guarderías públicas, frente al 2% en Calabria, Molise, o Sicilia (European Commission Network on Childcare, 1990)⁶.

En Alemania y en Holanda, la debilidad o ausencia de políticas de apoyo al empleo de las madres obedecía al poder político de los partidos

⁶ En Bolonia, donde el partido comunista ha tenido mucha fuerza, el 40% de los niños menores de tres años tenían plaza en guarderías públicas antes de los noventa, frente al 6% a escala nacional (Corsaro y Emiliani, 1992: 95).

cristiano demócratas y a la influencia del sector del voluntariado religioso (Tietze, Rossbach, y Ufermann, 1989: 64). En la República Federal de Alemania, la CDU-CSU dominó la escena política entre 1945 y 1969 y creó programas sociales que reflejaban las doctrinas católicas sobre la justicia, la solidaridad, y la búsqueda de una vía intermedia entre el socialismo y el capitalismo de libre mercado (Daly, 1999). Esta visión de las obligaciones sociales se basaba en el concepto de la familia patriarcal como unidad básica de la sociedad que debe ser protegida y apoyada. Se diseñaron prestaciones sociales generosas para ayudar a los hombres a mantener a sus familias y la legislación tributaria favorecía claramente a los hogares con un solo trabajador (Hantais, 1994: 147; Moeller, 1996: 127-128). Los valores sociales católicos no sólo justificaban un orden de géneros tradicional, sino que también bloqueaba la intervención del gobierno central en la esfera protegida de la familia. En virtud del principio de subsidiaridad, las funciones de bienestar social serían atendidas en el nivel más bajo posible de la sociedad, preferiblemente por las familias y las asociaciones del voluntariado (van Kersbergen, 1995; Daly, 1999).

Una de las razones por las que los cristiano demócratas mantuvieron su tradicionalismo en cuanto a los roles de género y las políticas familiares era que apenas tenían que hacer frente a la oposición de la izquierda en este área. En las tres décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, los partidos socialdemócratas no hicieron grandes campañas a favor de políticas que ayudaran a las madres a trabajar fuera de casa. La suma de altas tasas de religiosidad, bajas tasas de empleo de las mujeres con hijos, y estrictas normas sociales sobre la importancia del cuidado maternal a tiempo completo debilitaron la demanda social de tales políticas entre la opinión pública. En Holanda y en Alemania, por ejemplo, el empleo de las madres era generalmente visto como un signo del fracaso del Estado; si las madres tenían que trabajar, estaba claro que no hacía lo suficiente para apoyar a los hombres proveedores (Bussemaker, 1998; Kolbe, 1999).

Ante este conjunto de opiniones ampliamente compartido sobre las madres trabajadoras, la izquierda no hizo gran cosa por cuestionar el statu quo. En Holanda, por ejemplo, en 1973 llegó al poder un gobierno de coalición dominado por la izquierda y en 1977 publicó el primer documento sobre la política de igualdad de las mujeres. Sin embargo, en este documento no se decía nada de la participación de la mujer en el mercado de trabajo y las guarderías sólo se consideraban apro-

piadas para las madres solteras (Bussemaker, 1998; Clerkx y Van Ijzendoorn, 1992: 66). En Alemania, el SPD fue similarmente cauto en esta cuestión, y aunque durante todos los años setenta hubo gobiernos de coalición SPD-FDP, apenas se produjeron cambios en estas políticas. En resumen, debido a que la opinión pública sobre el tema del empleo de las madres continuó siendo bastante tradicional y conservadora, la izquierda no intentó explotar esta cuestión para competir con los cristiano demócratas. Esto, a su vez, hizo que los partidos cristiano demócratas no tuvieran que preocuparse por la pérdida del voto femenino, así que tenían escasos incentivos para cambiar la orientación “hombre proveedor” de sus políticas familiares.

En los años ochenta, un sentimiento de crisis se apoderó de muchos países de Europa Occidental en todo lo tocante al futuro del Estado del bienestar. Los “treinta gloriosos años” de rápido crecimiento económico y desarrollo del Estado del bienestar habían llegado a su fin: el estancamiento económico que apareció por primera vez en los años setenta dio lugar a tasas de desempleo crónicamente elevadas en muchos países. La perspectiva del envejecimiento de la población disparó las dudas sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud y pensiones. Y los movimientos políticos de libre mercado cobraron fuerza e influencia política. Juntas, estas fuerzas económicas y políticas echaron el freno a la expansión del Estado del bienestar. Aún así, en países que ya se habían embarcado en la reforma de las políticas públicas para apoyar el empleo de las madres antes de los años setenta, estos programas estaban a menudo perfectamente institucionalizados y pudieron continuar ayudando a un número creciente de madres trabajadoras. De este modo, los centros preescolares franceses eran un elemento consagrado de la sociedad francesa y corrían pocos riesgos de verse privatizados, y el compromiso sueco con el empleo de las madres alimentaba las expectativas de un desarrollo continuado de las guarderías públicas. Así pues, el sistema de guarderías sueco continuó creciendo durante los años ochenta y noventa. Ahora bien, en los países donde no se habían desarrollado tales programas o compromisos, la ralentización económica y la austeridad fiscal parecían limitar cualquier nueva iniciativa de política social. Los estudiosos comenzaron a hablar de la naturaleza congelada y arcaica del Estado del bienestar frente al continuo cambio social: el declive de la familia del hombre proveedor, el aumento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo y el creciente predominio de familias uniparentales, por ejemplo (Esping-Andersen, 1996; Pierson, 2001).

3. LA INFLUENCIA PERSISTENTE DE LA HISTORIA SOBRE LAS POLÍTICAS CONTEMPORÁNEAS DE EMPLEO Y FAMILIA

En la actualidad, uno podría esperar que las fuerzas históricas que sentaron las bases de los Estados del bienestar europeos pesaran menos en los debates contemporáneos sobre las políticas de empleo y familia. Los países europeos han cambiado mucho a lo largo de estas últimas décadas. Un cambio social notable ha sido la secularización, con marcados descensos en la asistencia a las iglesias y en las creencias religiosas en toda Europa Occidental. Al mismo tiempo, la participación de la mujer en la población activa ha aumentado en todas partes, aunque se mantengan importantes diferencias en el grado y la naturaleza del empleo de las madres. La preocupación por las bajas tasas de fertilidad y el envejecimiento de la población ha hecho que los políticos, incluso en regímenes de bienestar conservadores, empiecen a aceptar la idea de que han de hacer más para apoyar el empleo de las madres. Esto ha dado lugar a algunos cambios importantes en las políticas hacia los padres trabajadores en países como Holanda y Alemania, que invierten cada vez más en guarderías y en mejorar el acceso al empleo a tiempo parcial y a las licencias parentales.

Con todo, se aprecian varias formas en las que el pasado continúa influyendo en los debates contemporáneos sobre el empleo de las madres. Una de ellas es la institucionalización de la responsabilidad de los gobiernos en el fomento del bienestar de los niños y de las familias. En Francia, por ejemplo, el Estado asumió hace tiempo la responsabilidad de la educación y de la política familiar, como pone de manifiesto el sistema preescolar universal y público para niños de tres a seis años de edad, y la alta prioridad acordada a la política de ayuda a las familias. A partir de los años ochenta se ha empezado a registrar cierta devolución del control a los gobiernos locales y asociaciones del voluntariado, pero existe una aceptación generalizada de la idea de que es responsabilidad del Estado garantizar la educación de los niños desde su más tierna infancia y promover el bienestar de las familias. Si bien la naturaleza exacta del apoyo que debe prestarse a las familias es objeto de debate permanente, nadie cuestiona la responsabilidad del Estado con respecto al bienestar de las familias, y la Administración francesa continúa asignando unos recursos considerables a estas políticas.

En Holanda, en cambio, se mantiene esa mayor reticencia con respecto al papel del Estado en las vidas de los niños y de las familias. El principio de subsidiaridad conformó inicialmente un modelo de servicios educativos y sociales subvencionados por el Estado pero prestados por el sector privado. A pesar de la secularización de las organizaciones del voluntariado que se encargaban tradicionalmente de los programas sociales, en el área del cuidado infantil se ha mantenido la práctica de soluciones locales y no-gubernamentales. En lugar de poner en marcha un conjunto de programas universales administrados por el Estado, los Gobiernos holandeses han preferido usar subvenciones públicas para promover soluciones privadas. De este modo, Holanda ha desarrollado una versión modernizada del modelo de subsidiariedad, donde son agentes privados los que se hacen cargo de la tarea de prestar servicios para padres trabajadores. Esto se ha hecho en parte por motivos fiscales, en un esfuerzo por ahorrar dinero al erario público, pero también debido a la persistente aversión hacia una intervención directa del Estado en las vidas de los niños (Morgan, 2006).

El pasado también da forma al presente a través del impacto del Estado del bienestar en las actitudes y creencias populares. Los programas sociales se incrustan en el tejido de las relaciones sociales, afectando al comportamiento de los ciudadanos y a las expectativas sobre sus propias vidas y las responsabilidades del Estado en formas que cambian muy lentamente. Un Estado del bienestar que apoya el modelo del hombre proveedor influye en la forma en la que la gente organiza el trabajo y el cuidado infantil, así como en sus ideas sobre qué debe hacer el Estado. Por el contrario, las políticas que modifican radicalmente la división del trabajo entre los géneros crean (o refuerzan) la aceptación del empleo de las madres, así como las expectativas sobre la responsabilidad del Estado en el apoyo a los padres trabajadores. Así pues, aun cuando la religiosidad ha descendido en toda Europa Continental, las actitudes tradicionales hacia el empleo de las madres han perdurado en aquellos países donde siempre se había prestado un apoyo limitado a los padres trabajadores, poniendo límites al grado de cambio de las políticas. En los Estados nórdicos, en cambio, hace décadas que las políticas públicas comenzaron a dismantlar el modelo del hombre proveedor, de modo que hoy día el empleo de las madres está ampliamente aceptado.

Es posible apreciar el persistente poder de los valores sociales en la evolución de las políticas de empleo y familia holandesas desde los años 90.

El aumento del gasto público en guarderías y la introducción del derecho a un trabajo a tiempo parcial ha redundado en un aumento sustancial del empleo de mujeres y madres. En un período de tiempo relativamente corto, Holanda ha pasado de tener prácticamente la tasa de empleo femenino más baja de Europa Occidental a figurar en el nivel medio-superior en este indicador. Al mismo tiempo, no obstante, este aumento vertiginoso de la participación de las mujeres en la población activa se ha producido en gran medida a través del trabajo a tiempo parcial. La gran mayoría de madres de niños de corta edad con empleo remunerado trabajan a tiempo parcial, y muchas incluso se retiran totalmente del mercado de trabajo. Una razón de ello es la continuada reticencia social hacia las madres que trabajan mientras sus hijos son aún pequeños. El trabajo a tiempo parcial representa así una forma de modernizar el modelo de hombre proveedor transformándolo en un modelo de "trabajador y medio", en lugar de una plena aceptación del empleo de las madres.

Así pues, algunos de los cambios que están teniendo lugar en las políticas de empleo y familia son ejemplos de "cambio acotado": políticas que se apartan claramente del pasado pero que aún están acotadas por las instituciones preexistentes (Thelen, 2003). Evidentemente, existen presiones y demandas nuevas sobre los Estados que son una fuente de dinamismo en las políticas del Estado del bienestar. El Estado del bienestar europeo no se halla en estado de congelación sino que está evolucionando a través de cambios de política incrementales y a veces significativos. Con todo, una perspectiva histórica sobre el desarrollo de los mecanismos institucionales existentes ayuda a explicar el contexto estructural general que sigue afectando a las políticas de empleo y familia en Europa Occidental.

4. IMPLICACIONES PARA EL ESTUDIO DE LA POLÍTICA EUROPEA

Al margen del estudio del Estado del bienestar, resultaría provechoso que los académicos prestaran más atención al papel de la religión en la conformación del desarrollo político europeo. Como se ha mostrado en este estudio, las divisiones religiosas durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX influyeron en el grado de centralización estatal, la relación entre el Estado y la sociedad civil,

y la estructura de la competencia entre los partidos políticos. Todos estos factores han influido en el curso de la política europea desde entonces y potencialmente conformado un conjunto de áreas de políticas públicas fuera del ámbito estrictamente dicho del Estado del bienestar, tales como los sistemas educativos y las políticas con respecto al aborto, la homosexualidad, y otros derechos del cuerpo. Sin embargo, los estudiosos llevan tiempo centrando su atención bien en los partidos de izquierdas o en la extrema derecha, descuidando esa parte del espectro político que ha sido tan influyente en la política de Europa Occidental: el centro derecha moderado.

Una mejor comprensión de la importancia de la política de la religión en la conformación del desarrollo político europeo también ayudaría a desechiar la noción de que en Europa Occidental echó raíces un proceso monolítico de secularización que distingue a esta región del resto del mundo. En la actualidad, muchos países europeos están altamente secularizados, pero en el siglo XIX y hasta bien avanzado el siglo XX existieron disputas y debates constantes sobre la relación entre la Iglesia y el Estado, la función de la religión en la esfera pública, y las pretensiones de sectas religiosas competidoras de arrogarse autoridad social y política. Estos conflictos pusieron en entredicho la emergencia y viabilidad de formas de gobierno democráticas pero se resolvieron de maneras que acabaron trayendo paz y estabilidad política. Por ello, la experiencia europea en la gestión de estas divisiones políticas podría encerrar lecciones sobre cómo podrían los países abordar los conflictos sectarios actuales.

Por último, un examen de la política religiosa del pasado también puede resultar útil a la hora de reflexionar sobre cómo están haciendo frente los propios países europeos a las nuevas divisiones religiosas actuales. Durante muchos años, la respuesta holandesa a la creciente población musulmana ha sido acomodar sus prácticas religiosas justamente como se hizo para católicos y protestantes a lo largo del siglo XX: tolerando la diferencia y otorgando subvenciones públicas a las organizaciones del voluntariado religioso que proporcionan servicios educativos y sociales. El enfoque francés, en cambio, refleja sus propias batallas pasadas sobre la relación entre la Iglesia Católica y el Estado. En una reescenificación de los conflictos entre clericalismo y anticlericalismo de comienzos del siglo XX, el restringir las subvenciones a los grupos religiosos y el prohibir la exhibición de la religión en la esfera pública ha reafirmado la naturaleza secular de la

república francesa. En la actualidad, los ciudadanos de ambos países están cuestionando los méritos de estos dos modelos, por lo que podrían evolucionar en el curso de los próximos años. Aun así, una perspectiva histórica sobre la política religiosa en estas y otras naciones europeas arroja luz a los dilemas y debates actuales sobre cómo integrar a las nuevas minorías religiosas en las sociedades y sistemas políticos europeos.

BIBLIOGRAFÍA

ANTOMARCHI, V. (1996), "La famille et le Parlement de 1870 à 1914", *Recherches et Prévisions*, 44 (junio): 37-42.

ARCHAMBAULT, E. (1996), *Le Secteur sans but lucratif: Associations et Fondations en France*, París, Economica.

BIMBI, F., y V. DELLA SALLA (1998), "L'Italie: Concertation sans représentation", en JENSON, J. y M. SINEAU (eds.), *Qui doit garder le jeune enfant? Mode d'accueil et travail des mères dans l'Europe en crise*, París, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence: 173-202.

BRADLEY, D. (2000), "Family Laws and Welfare States", en MELBY, K.; PYLKKANEN, A.; ROSENBECK, B., y C. CARLSSON WETTERBERG (eds.), *Nordic Model of Marriage and the Welfare State*, Copenhagen, Nordic Council of Ministers: 37-66.

BRENTON, M. (1982), "Changing Relationships in Dutch Social Services", *Journal of Social Policy*, 11, 1: 59-80.

BUSSEMAKER, J. (1998), "Rationales of Care in Contemporary Welfare States: The Case of Childcare in the Netherlands", *Social Politics*, 5, 1: 70-96.

CLERKX, L. E., y M. H. VAN IZENDOORN (1992), "Child Care in a Dutch Context" en BROBERG, A. G.; HWANG, P.; LAMB, M. E., y K. J. STERNBERG (eds.), *Child Care in Context: Cross-Cultural Perspectives*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates: 55-80.

CORSARO, W. A., y F. EMILIANI (1992), "Child Care, Early Education, and Children's Peer Culture in Italy", en LAMB, M.; STERNBERG, K.; HWANG, C.-P., y A. BROBERG (eds.), *Child Care in Context: Cross-Cultural Perspectives*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates: 81-115.

DAJEZ, F. (1994), *Les origines de l'école maternelle*, París, Presses universitaires de France.

DALY, M. (1999), "The Functioning Family: Catholicism and Social Policy in Germany and Ireland", *Comparative Social Research*, 18: 105-133.

DUBOIS, A.; HUMBLET, P., y F. DEVEN (1994), "L'accueil des enfants de moins de trois ans", *Courrier hebdomadaire du CRISP*, 1463-1464.

EDGEELL, P. (2006), *Religion and Family in a Changing Society*, Princeton, Princeton University Press.

ESPING-ANDERSEN, G. (1996), "Welfare States without Work: the Impasse of Labour Shedding and Familialism in Continental European Social Policy", en ESPING-ANDERSEN, G. (ed.), *Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economies*, London/Thousand Oaks/New Delhi, Sage Publications: 66-87.

EUROPEAN COMMISSION NETWORK ON CHILDCARE (1990), *Childcare in the European Community, 1985-1990*, Bruselas, Comisión de las Comunidades Europeas.

FIX, B. (2000), "Church-State Relations and the Development of Child Care in Austria, Belgium, Germany, and the Netherlands", en PFENNING, A., y T. BAHLE (eds.), *Families and Family Policies in Europe: Comparative Perspectives*, Frankfurt am Main, Peter Lang: 305-321.

HALPERIN, S. W. (1947), "Italian Anticlericalism, 1871-1914", *Journal of Modern History*, 19, 1: 18-34.

HANTRAI, L. (1994), "Comparing Family Policy in Britain, France and Germany", *Journal of Social Policy*, 23, 2: 135-160.

HUBER, E.; RAGIN, C., y J. D. STEPHENS (1993), "Social Democracy, Christian Democracy, Constitutional Structure, and the Welfare State", *American Journal of Sociology*, 99, 3: 711-749.

IRVING, R. E. M. (1973), *Christian Democracy in France*, Londres, George Allen & Unwin, Ltd.

KALYVAS, S. (1996), *The Rise of Christian Democracy in Europe*, Ithaca, Cornell University Press.

KOLBE, W. (1999), "Gender and Parenthood in West German Family Politics from the 1960s to the 1980s", en TORSTENDAHL, R. (ed.), *State Policy*

and Gender System in the Two German States and Sweden 1945-1989, Uppsala, University of Uppsala Press: 133-167.

LENOIR, R. (2003), *Généalogie de la morale familiale*, París, Editions du Seuil.

LIPSET, S. M., y S. ROKKAN (1967), "Cleavage Structure, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction", en LIPSET y ROKKAN (eds.), *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*, Nueva York, Free Press: 1-64.

LYNCH, J. (2009), "Italy: A Christian Democratic or Clientelist Welfare State?", en VAN KERSBERGEN, K., y P. MANOW (eds.), *Religion, Class Coalitions, and Welfare States*, Cambridge, Cambridge University Press: 91-118.

MALLINSON, V. (1963), *Power and Politics in Belgian Education 1815 to 1961*, Londres, Heinemann.

MARQUES-PEREIRA, B., y O. PAYE (1998), "La Belgique: Vices et vertus du pragmatisme", en JENSON, J., y M. SINEAU (eds.), *Qui doit garder le jeune enfant? Mode d'accueil et travail des mères dans l'Europe en crise*, París: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence: 109-139.

MARRARO, H. R. (1936), *New Education in Italy*, Nueva York, S.F. Vanni, Inc.

MARTIN, C., y P. HASSENTEUFEL (1997), *La représentation des intérêts familiaux en Europe: Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, France, Portugal*, Informe no publicado para la Comisión Europea, Dirección General V.

MARTIN, D. (1969), "Notes for a general theory of secularization", *Archives européennes de sociologie*, 10: 192-201.

MOELLER, R. G. (1996), *Protecting Motherhood: Women and the Family in the Politics of Postwar West German*, Berkeley, University of California.

MORGAN, K. J. (2002), "Forging the Frontiers between State, Church, and Family: Religious Cleavages and the Origins of Early Childhood Education in France, Sweden, and Germany", *Politics and Society*, 30, 1: 113-148.

– (2003), "The Politics of Mothers' Employment: France in Comparative Perspective", *World Politics*, 55, 2: 259-289.

– (2006), *Working Mothers and the Welfare State: Religion and the Politics of Work-Family Policies in Western Europe and the United States*, Palo Alto, Stanford University Press.

– (2009), “The Religious Foundations of Work-Family Policies in Western Europe”, en VAN KERSBERGEN, K., y P. MANOW (eds.), *Religion, Class Coalitions, and Welfare States*, Cambridge, Cambridge University Press: 56-90.

PEDERSEN, S. (1993), *Family, Dependence, and the Origins of the Welfare State*, Cambridge, Cambridge University Press.

PIERSON, P. (2001), “Post-Industrial Pressures on Mature Welfare States”, en PIERSON, P. (ed.), *The New Politics of the Welfare State*, Oxford, Oxford University Press: 80-104.

PISTILLO, F. (1989), “Preprimary Education and Care in Italy”, en OLMSTED, P. P., y D. P. WEIKART (eds.), *How Nations Serve Young Children: Profiles of Child Care and Education in 14 Countries*, Ypsilanti, MI., High/Scope Press: 151-202.

QUINE, M. S. (2002), *Italy's Social Revolution: Charity and Welfare from Liberalism to Fascism*, Nueva York, Palgrave.

SAINSBURY, D. (1996), *Gender, Equality, and Welfare States*, Cambridge, Cambridge University Press.

SARACENO, C. (1984), “Shifts in Public and Private Boundaries: Women as Mothers and Service Workers in Italian Daycare”, *Feminist Studies*, 10, 1: 7-29.

SCHMID, J. (1995), “Verbändewohlfahrt im modernen Wohlfahrtsstaat: Strukturbildende Effekte des Staat-Kirche-Konflikts”, *Historical Social Research*, 20, 2: 88-118.

SPOTTS, F. (1973), *The Churches and Politics in Germany*, Middletown CT, Wesleyan University Press.

TALMY, R. (1962), *Histoire du mouvement familial en France: 1896-1939, volume 1*, Paris, Union Nationale des Caisses d'Allocations Familiales.

THELEN, K. (2002), “How Institutions Evolve: Insights from Comparative-Historical Analysis”, en MAHONEY, J., y D. RUESCHEMEYER (eds.), *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*, Nueva York, Cambridge University Press: 208-240.

THERBORN, G. (1993), “The Politics of Childhood: The Rights of Children in Modern Times”, en CASTLES, F. (ed.), *Families of Nations: Patterns of Public Policy in Western Democracies*, Aldershot, Dartmouth Publishing Company Ltd.: 241-93.

TIETZE, W.; ROSSBACH, H-G., y K. UFERMANN (1989), “Child Care and Early Education in the Federal Republic of Germany”, en OLMSTED, P. P., y D. P. WEIKART (eds.), *How Nations Serve Young Children: Profiles of Child Care and Education in 14 Countries*, Ypsilanti, MI., High/Scope Press: 39-85.

VALIENTE, C. (2009), “Child Care in Spain after 1975: The Educational Rationale, the Catholic Church, and Women in Civil Society”, en SCHEIWE, K., y H. WILLEKENS (eds.), *Child Care and Preschool Development in Europe: Institutional Perspectives*, Houndmills, Palgrave Macmillan: 72-87.

VAN KERSBERGEN, K. (1995), *Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State*, Londres y Nueva York, Routledge.

VAN KERSBERGEN, K., y P. MANOW (eds.) (2009), *Religion, Class Coalitions, and Welfare States*, Cambridge, Cambridge University Press.